



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT 0077/2017

FECHA: 30 de mayo de 2017

ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0077/2017 presentada por [REDACTED], Secretaria del sector de Administración Autonómica de FeSP-UGT Madrid, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos que han motivado la presente reclamación pueden sistematizarse como sigue.

- Por escrito de 15 de enero de 2017, la ahora reclamante remitió un escrito a la Comunidad de Madrid, a través de su Porta del Transparencia, en el que, tras indicar que las leyes de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid establecen que las plazas vacantes y dotadas presupuestariamente serán incluidas en las correspondientes ofertas de Empleo Público de cada año y que el EBEP autoriza la cobertura de dichas plazas con personal interino -artículo 10.a), solicita

Qué números de puesto de trabajo se corresponden con cada una de las plazas de personal funcionario de administración y servicios, y de personal laboral del Convenio Colectivo de la Comunidad de Madrid, incluidas o vinculadas a la Oferta Pública de Empleo del año 2014, 2015 y 2016.

ctbg@consejodetransparencia.es



- Mediante Resolución de 26 de enero de 2017 del Director General de Función Pública de la Comunidad de Madrid se inadmite el acceso a la información solicitada al considerar de aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno -desde ahora, LTAIBG-. En concreto, se argumenta lo siguiente:
 - o *El artículo 70 del real decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto Básico del Empleado Público, dispone que “Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público”, sin exigir, en modo alguno, que las plazas que sean objeto de inclusión en una Oferta de Empleo Público hayan de tener asociadas un puesto de trabajo concreto, o lo que es lo mismo, sin aludir en ningún momento a puestos de trabajo ni a la dotación presupuestaria específica que habría de ir ligada a los mismos, bastando, por el contrario, con que estos extremos sean reales y efectivos en el momento del nombramiento o de la contratación del personal que corresponda tras la superación del proceso selectivo que derive de la ejecución de la Oferta de Empleo Público de que se trate. En apoyo de sus alegaciones alude a diferentes fallos jurisprudenciales en los que se menciona la diferencia entre “vacante” y “puesto de trabajo” -STSJ de la Comunitat Valenciana de 25 de septiembre de 2008 y STS de 30 de junio de 1997.*
 - o *Las Leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid de las anualidades correspondientes a 2014, 2015 y 2016 disponen la posibilidad de que las plazas vinculadas a Oferta de Empleo Público puedan ser objeto de amortización como consecuencia de procesos de reordenación o reorganización administrativa, por razones de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos humanos existentes o por motivos de índole presupuestaria, mientras no se encuentren incursas en convocatorias de pruebas selectivas aprobadas, circunstancia ésta que no hace sino confirmar la diferencia conceptual entre las plazas vinculadas a Oferta y los puestos de trabajo con los que, posteriormente, habrán de identificarse las mismas.*
 - o *Los datos relativos a los puestos de trabajo en los que se concretan las plazas contenidas en las distintas Ofertas de Empleo Público son objeto de información pública en el momento en el que, una vez convocados los procesos selectivos en los que se ofertan aquéllas, se facilitan los destinos -puestos de trabajo- a los aspirantes que superan los mismos, publicándose dicha información en la página web de la Comunidad de Madrid, página ésta que se encuentra disponible para su consulta, de*



conformidad con el artículo 26.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la Base Undécima del Anexo IX del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.

- Frente a esta Resolución de 26 de enero de 2017, [REDACTED] por escrito registrado en esta Institución el 6 de marzo de 2017 interpone reclamación al amparo del artículo 24 de la LTAIBG. En síntesis, considera que si se trata de información disponible pues “la Ley de presupuestos obliga a que las vacantes producidas en cada año se vinculen a la siguiente oferta de empleo. Esta concreción además queda patente cuando las plazas vacantes se ocupan con personal interino, pasando a tener cada persona interina un puesto concreto, con un número de puesto concreto que figura en su nombramiento y formando parte de una RPT”. Asimismo, continúa su motivación, “En relación a que la información puede cambiar en el futuro por posibles amortizaciones, tampoco nos parece argumento suficiente para denegar estos datos. En caso de decidir amortizar puestos, la administración estará ejerciendo su derecho y su potestad autoorganizativa, pero la potestad autoorganizativa no está reñida con la transparencia, y las plazas que se amortizaran, contarán con un número de puesto concreto, y se deberá proceder en dicho momento al cese del personal que las ocupe, siendo las restantes, en su caso, objeto de posterior convocatoria”.

2. El mismo 6 de marzo, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, se dio traslado del expediente de referencia, por una parte, a la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid para conocimiento y, por otra parte, al Secretario General Técnico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, se formularan las alegaciones que se estimasen convenientes, aportando, asimismo, toda la documentación en la que fundamentar las alegaciones que pudieran realizarse.

Por escrito registrado en esta Institución el 30 de marzo de 2017 de la Dirección General de Función Pública de la Consejería de referencia, se traslada escrito de alegaciones en el que se pone de manifiesto lo siguiente:

- *La Resolución 26 de enero de 2017 ahora recurrida fue notificada en fecha de 1 de febrero de 2017 -tal y como figura en la copia que se adjunta del acuse de recibo del servicio de correos-. De este modo, la reclamación planteada por la ahora recurrente el 6 de marzo de 2017 resulta extemporánea, toda vez que el plazo para su interposición finalizó el 1 de marzo.*
- *Analizada la reclamación presentada ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se observa que la interesada, lejos de refutar la causa por la que se inadmite su solicitud, reconoce expresamente que la información de los puestos de trabajo con los que hayan de*



corresponderse las plazas contenidas en las Ofertas de Empleo Público - ya sean las de las anualidades que cita la reclamante, o las de cualquier otra- es objeto de información pública, tanto para los aspirantes que concurran a las pertinentes pruebas selectivas, como para todo ciudadano que estuviera interesado en dicha información, incluidos, como no podía ser de otro modo y a diferencia de lo que parece creer la mencionada representante sindical, cualquier trabajador interino que pudiera estar prestando servicios en la Administración de la Comunidad de Madrid.

- *En relación a la manifestación en el sentido de que "(...) la Ley de Presupuestos obliga a que las vacantes producidas en cada año se vinculen a la siguiente oferta de empleo", es de advertir que, muy al contrario de lo que afirma la interesada, la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente a cada anualidad -en adelante, LPGE-, no hace sino establecer limitaciones de diversa índole a fin de que las Administraciones Públicas no incluyan de forma automática en las Ofertas de Empleo Público la totalidad de las vacantes que, en su caso, pudieran existir en su estructura organizativa, sino que habrán de ser valorados los sectores y/o colectivos a las que se hallan adscritas las plazas de que se trate, así como la tasa de reposición de efectivos que deberá ser, en todo caso, respetada, de conformidad con lo que disponga la normativa básica estatal y, muy especialmente, la LPGE de cada ejercicio.*
- *Con objeto de incidir en la importancia de distinguir entre el concepto de plaza y el de puesto de trabajo en el que habrá de concretarse la misma - y recordando que tanto las plazas como los puestos serán objeto de publicación general en distintos momentos procedimentales-, basta con observar los contenidos de diversos Acuerdos suscritos con las Organizaciones Sindicales legitimadas a tal efecto, y que afectan a futuras convocatorias de procesos selectivos, en los que se prevé, siempre que la normativa básica estatal lo permita, la inclusión en las Ofertas de Empleo Público de las distintas anualidades, de un número concreto de plazas, respecto de las cuales, con anterioridad a que se publiquen los destinos -puestos de trabajo- a cubrir a través de dichas convocatorias, habrá de procederse a la creación de los puestos correspondientes. A título de ejemplo, señalar el Acuerdo de 5 de abril de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 30 de marzo de 2016, de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración y Servicios, por el que se regulan las condiciones de trabajo del Cuerpo de Bomberos para el período 2016-2020 (BOCM de 15 de abril de 2016), en cuyo Anexo, concretamente en el punto 2 del mismo, se refleja un Plan de Empleo con plazas a convocar sin correspondencia alguna con puestos de trabajo que habrán de ser creados en el número indicado en dicho Acuerdo según el año de que se trate.*
- *Respecto de la afirmación contenida en el párrafo final de la reclamación en modo alguno existe una negativa por parte de esta Administración a informar sobre los puestos de trabajo sobre los que versa la petición de la*



solicitante, sino que, muy al contrario, y como ya se ha indicado anteriormente, la información de referencia será hecha pública para todos los ciudadanos, sin excepción alguna, en el momento procedimental que ya se ha indicado a lo largo del presente escrito.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. (...).

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad de Madrid (Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno) suscribieron el pasado 2 de noviembre de 2016 un *Convenio para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno* -BOE, n. 13, de 16 de enero de 2017- en los supuestos de resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y por las Entidades



Locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los entes, organismos y entidades integrados en el sector público autonómico o local.

3. Precisadas las reglas sobre competencia orgánica para dictar esta resolución, con carácter preliminar, y dado que ha sido invocado por la administración autonómica, debemos centrar nuestra atención en el examen de la concurrencia o no de la causa de extemporaneidad alegada, puesto que en caso de apreciar su existencia habrá de inadmitirse la Reclamación sin entrar en el fondo del asunto.

A estos efectos, cabe señalar que el artículo 24.2 de la LTAIBG dispone lo siguiente

La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.

En el presente caso, de los antecedentes que obran en el expediente se desprende que la Resolución de 26 de enero de 2017 del Director General de Función Pública por la que se inadmite, en virtud del artículo 18.1.a) de la LTAIBG, la solicitud de acceso a la información planteada fue notificada a la interesada el 1 de febrero de 2017. De acuerdo con ello, cabe advertir, en consecuencia, que la interposición de la presente Reclamación se ha llevado a cabo con posterioridad al plazo previsto en la LTAIBG para su planteamiento, esto es se han incumplido los plazos previstos en la LTAIBG para ejercitar la acción por cuanto se ha interpuesto superado el plazo de un mes del que dispone para recurrir.

El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece la obligación de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas y de los interesados de cumplir los términos y plazos establecidos por las leyes para la tramitación de los asuntos.

Asimismo, el artículo 30 de la precitada Ley 39/2015, de 1 de octubre, prevé que los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Añadiendo que si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

En conclusión, en atención a todo lo expuesto y tomando en consideración lo previsto en el artículo 116.d) de la precitada Ley 39/2015, de 1 de octubre, procede declarar la inadmisión a trámite de la reclamación por incumplimiento de los plazos establecidos en la norma para su presentación.



III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **INADMITIR** por extemporánea la Reclamación presentada frente a la Resolución del Director General de Función Pública de la Comunidad de Madrid de 26 de enero de 2017.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Fdo: Esther Arizmendi Gutiérrez

